

## La Ofensiva Electoral

*“El Sistema Electoral venezolano es uno de los mejores del mundo”.*

Hugo Chávez, 20 de septiembre de 2012.

El pago de millones de dólares a cabilderos para promover la causa del presidente Hugo Chávez en Estados Unidos fue apenas una de las múltiples vías en que los chavistas se verían implicados en negociaciones, disputas y escándalos en territorio norteamericano.

Una completa saga de controversias que se prolongó entre 2004 y 2009 tuvo como protagonista principal a la firma de elecciones Smartmatic, con sede en Boca Ratón, Florida, e implicó a altos funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo un vicepresidente y un embajador de Venezuela en Washington, y un grupo de empresarios venezolanos que provocaron desde investigaciones federales hasta cambios radicales en leyes que fueron reforzadas para frenar la penetración extranjera en Estados Unidos.

La expansión de la firma de elecciones en Estados Unidos, después de ayudar a organizar uno de los eventos comiciales más polémicos en la historia de Venezuela, en agosto de 2004, provocó una ola de paranoia desde Miami hasta Washington, pasando por Chicago y Nueva York, que acabó con las ambiciones de Smartmatic de

penetrar el mayor mercado de elecciones del mundo, debido a conexiones secretas con Venezuela que nunca terminaron por aclararse.

## Los orígenes

Smartmatic fue creada por primera vez e inscrita oficialmente como una empresa no en Venezuela, de donde eran originarios sus fundadores, sino en el registro de corporaciones del estado de Delaware, Estados Unidos, el 11 de abril de 2000<sup>1</sup>.

Sus propietarios estaban vinculados familiarmente a la firma venezolana Panagroup, una empresa de tecnología informática establecida en 1977 en Caracas<sup>2</sup>.

El 11 de septiembre de 2000, cuatro meses después de su fundación en Delaware, la empresa fue incluida también en el registro de corporaciones de la Florida, en Tallahassee. De acuerdo con los documentos, el directivo Alfredo Anzola solicitó autorización para que la firma pudiese funcionar como empresa extranjera en el estado de la Florida, con una base de operaciones en el 19591 Dinner Key Drive, de Boca Ratón, a hora y media al norte de Miami<sup>3</sup>.

Smartmatic había surgido como una iniciativa de un grupo de jóvenes especialistas en computación, liderados por Antonio Mugica, Alfredo Anzola y Roger Piñate, que tenían la particular ambición de convertirse en los nuevos Bill Gates de Venezuela.

“Eran muchachos sencillos y brillantes que aspiraban a dejar una huella en el campo de la informática y la tecnología a nivel mundial”, le comentó al autor uno de los directivos de Smartmatic en Boca Ratón, cuando la firma comenzó a generar fuertes polémicas en Estados Unidos en 2005.

El fundador, Antonio Mugica, nacido en Caracas en 1974, se graduó de ingeniero electrónico en la Universidad Simón Bolívar (USB) de Caracas, uno de los centros élite de formación tecnológica de Venezuela. Junto a su padre Antonio Mugica Sesma, había sido miembro de la directiva de Panagroup.

Mugica residió brevemente en Boca Ratón, donde desarrolló una investigación sobre robótica en la Florida Atlantic University, donde cursó estudios<sup>4</sup>.

El joven ingeniero fue el creador de la “visión” de Smartmatic como una empresa de servicios tecnológicos dirigidos a explotar el prometedor campo de las redes digitales, que permitían conectar diversos equipos de forma instantánea, y de donde surgió el eslogan All Things Connected, que adoptó la compañía<sup>5</sup>.

Alfredo Anzola, un ingeniero industrial y amigo de infancia de Mugica, también nacido en 1974, desarrolló la estructura empresarial de la firma. Roger Piñate, otro ingeniero electrónico graduado de la USB, fue el responsable de supervisar la estrategia de producción y el proceso de diseño industrial de los productos de Smartmatic<sup>6</sup>.

Aunque establecida en Willmington y Boca Ratón, Smartmatic era la punta de lanza de un ambicioso plan para llevar a cabo nuevos y prometedores negocios en Venezuela, gracias a importantes conexiones con sectores de poder.

Estratégicamente, la firma comenzó a exhibirse como una “compañía de capital mixto alemán, venezolano y estadounidense”, con oficinas principales en la Florida<sup>7</sup>.

Pero para Mugica, uno de los objetivos principales era diseñar soluciones específicamente dirigidas al gobierno venezolano<sup>8</sup>.

Para fines de 2001, Smartmatic ya compartía con Panagroup una cartera de clientes que incluían varios organismos estatales, como Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la

Defensoría del Pueblo, un ente creado por Hugo Chávez como parte del naciente Poder Moral, que incluía los organismos contralores del país como la Fiscalía y la Procuraduría General de la República.

El gran salto de la empresa vino en 2003, luego de su registro como corporación en la isla de Curazao, exactamente el 14 de febrero, bajo el nombre de Smartmatic International Group N.V.

A partir de ese momento, Alfredo Anzola inició los arreglos para establecer una alianza estratégica que conectó estrechamente a Smartmatic con el gobierno de Chávez.

Casi inmediatamente después de inscribir Smartmatic como una corporación norteamericana tanto en Delaware como en Florida, Mugica y Anzola también registraron una segunda firma destinada a jugar un papel clave en la estrategia de crecimiento de Smartmatic en Venezuela.

La firma Bizta Corporation fue incorporada por Anzola en Delaware el 12 de abril de 2000, un día después del registro de Smartmatic. La incorporación en el registro de empresas de Tallahassee, Florida, se hizo nueve meses después, el 24 de enero de 2001, también por mano de Anzola y utilizando la misma dirección de Smartmatic.

La empresa se estableció con un capital de 5 millones de bolívares, equivalente a unos \$10,000 al cambio oficial de 1997.

Sin embargo, para financiar proyectos ulteriores, Bizta recibió un préstamo que desató el primero de varios escándalos que pusieron a Smartmatic literalmente en el ojo de la tormenta en Venezuela y Estados Unidos.

## Negocios polémicos

El primer gran negocio que se presentó en el horizonte de Smartmatic surgió tras la llegada del psiquiatra Jorge Rodríguez a la directiva del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), en agosto de 2003.

Previamente, como presidente de la Junta Electoral Nacional, el organismo encargado de los detalles técnicos de elecciones y referendos, Rodríguez promovió intensamente la idea de que el sistema electoral venezolano debía ser “modernizado”, a pesar de que el sistema vigente entonces contaba ya con 7,000 máquinas electrónicas de votación en pleno funcionamiento, instaladas en 1998 por la empresa española Indra a un costo de \$136 millones<sup>9</sup>.

El proceso de licitación para un nuevo sistema estuvo lleno de marchas y contramarchas. Entre las empresas que manifestaron su intención de participar destacaban tres: la norteamericana Election System & Software (ES&S), la mayor firma de elecciones del mundo, que exhibía una experiencia en centenares de comicios en el mundo; la española Indra, que ofrecía actualizar el sistema que ya había instalado en el país; y la pequeña firma de Boca Ratón, cuya tecnología nunca había sido usada previamente en un conteo de votos electrónico.

Contra todo pronóstico, Smartmatic obtuvo la aprobación del CNE para automatizar el sistema de votación a nivel nacional. El organismo no consideró esencial la inexperiencia de Smartmatic, a pesar de que otra firma que tampoco exhibía experiencia electoral fue terminantemente rechazada por el rector Rodríguez con ese mismo argumento<sup>10</sup>.

El CNE decidió automatizar totalmente las elecciones para organizar el referéndum revocatorio, la primera consulta nacional sobre si Chávez debía salir del gobierno a mitad de período, en agosto de 2004, o debía concluir su período hasta el final. Este mecanismo de consulta había sido aprobado en la reforma constitucional de 1999, que el propio Chávez había promovido.

El hecho de que por primera vez se automatizasen totalmente los comicios en Venezuela para este decisivo referéndum provocó suspicacias de inmediato.

“Adiós a las boletas electorales rellenas manualmente. Adiós a los lectores ópticos. Adiós a las 7,350 máquinas de escrutinio que usó la empresa Indra para contar los votos de las últimas 7 elecciones. A partir de ahora, los venezolanos usaremos una nueva tecnología (Touch Screen, pantallas sensibles al tacto) para ejercer el sufragio”, editorializó el diario El Nacional de Caracas, expresando un velado escepticismo ante el dramático cambio que había aprobado el CNE.

### Conflictos de interés

Smartmatic ganó un contrato de \$91 millones que luego se incrementaría a \$111 millones<sup>11</sup>, tras presentar una plataforma tecnológica en sociedad con otras dos empresas: la corporación Bizta, creada en Florida en el 2000, y la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), el principal proveedor de servicios telefónicos en Venezuela<sup>12</sup>.

Parte de las acciones de Cantv estaban entonces en manos de la telefónica norteamericana Verizon, mientras que el Estado venezolano controlaba un paquete

accionario de 6.6%, el único remanente estatal que quedó luego de la privatización de la telefónica en 1992.

El resultado de esta alianza fue el Consorcio SBS (por las iniciales de Smartmatic, Bizta y Cantv). De acuerdo con el contrato, Smartmatic se haría cargo de diseñar y construir las máquinas touchscreen. Por su parte, Bizta tenía la responsabilidad de prestar apoyo técnico local. Y finalmente Cantv tendría bajo su control la transmisión de datos a través de sus redes de telefonía a nivel nacional.

El multimillonario contrato con el CNE significó para Smartmatic un salto dramático: de ser una firma con ventas de apenas \$1.47 millones a mediados del 2003, pasó a manejar un presupuesto 25 veces mayor en menos de un año, según un reporte de la firma Dun & Bradstreet, de Nueva Jersey<sup>13</sup>.

El consulta sobre si Chávez debía continuar en la presidencia se había aprobado luego de un largo proceso de recolección de firmas por parte de la oposición, que obligó al CNE a dar el visto bueno a la consulta, a pesar de la fuerte oposición del chavismo.

A fines de mayo de 2004, tres meses después de la firma del contrato entre el CNE y el Consorcio SBC, estalló el primer escándalo que puso en serios aprietos a los jóvenes tecnólogos y al gobierno de Chávez.

Sin que nadie lo supiera, el gobierno había logrado controlar casi un tercio de las acciones de una de las empresas que integraban el Consorcio SBS, la corporación Bizta, y de hecho mantenía un representante oficial en la junta directiva de esa empresa<sup>14</sup>.

Bizta había recibido una inyección de unos \$200,000 por parte del gobierno a través de la Sociedad de Capital a Riesgo (SCR), una empresa perteneciente al gubernamental Fondo Industrial de Crédito.

El capital invertido por SCR le dio el control sobre 3 millones de acciones de Bizta, es decir un 28% de las acciones totales, y el derecho de nombrar a un director en la junta directiva. En enero de 2004, el gobierno chavista designó en esta posición a Omar Montilla, un alto funcionario del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela. Nadie vio como mera coincidencia que la aprobación del contrato millonario entre el CNE y el consorcio SBC se produjo un mes después de que Montilla se uniera a la junta directiva de Bizta<sup>15</sup>.

Aunque voceros de la empresa y del gobierno trataron de minimizar el impacto de las revelaciones, no explicaron por qué nadie en Smartmatic, ni en el CNE ni en el gobierno venezolano, diera a conocer esta asociación estratégica que suponía un abierto conflicto de intereses, y que sembró dudas sobre la credibilidad del Consorcio SBC.

Tanto Mugica, fundador de Bizta, como Anzola, su presidente, dijeron que consideraban la inyección de \$200,000 no como una inversión, sino como un préstamo, aunque no explicaron por qué un préstamo le daba al gobierno un importante control accionario sobre la empresa y un puesto en la directiva.

“Bizta recibió un préstamo de Foncrei, una institución del Estado que promueve el desarrollo, y en virtud de ello Omar Montilla forma parte de la junta directiva”, admitió Mugica. Sin embargo, para defenderse, dijo que el gobierno no era el mayor accionista de la empresa, y que la telefónica Cantv también tenía una participación oficial que nadie estaba criticando<sup>16</sup>.

Mugica estaba en lo cierto. No sólo Bizta tenía representación del gobierno chavista. Cantv “mantiene a dos personas del gobierno dentro de la junta directiva”, acotó

Mugica de forma malhumorada en una conferencia de prensa.

Las sospechas de que las relaciones entre Smartmatic y el gobierno pudieran poner en riesgo la independencia de la consulta revocatoria, generó preocupaciones entre congresistas norteamericanos.

En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del senado estadounidense a mediados de 2004 para tratar la situación política venezolana, el senador demócrata por la Florida Bill Nelson expresó su preocupación sobre la posibilidad de que los resultados del referéndum revocatorio fuesen objeto de “manipulación”, debido a la participación accionaria del gobierno en el consorcio que iba a realizar las elecciones. “Estamos preocupados por el hecho de que estas máquinas se están usando por primera vez y por la posibilidad de que se produzca una manipulación de los resultados”, declaró entonces el senador Nelson al autor<sup>17</sup>.

Nelson recomendó a los representantes del Centro Carter que acudieron a la audiencia en el Capitolio, “observar de cerca” a la firma Smartmatic, debido a que planeaba usar un software “que nunca se ha puesto a prueba en un proceso eleccionario”.

El senador Nelson no era el único que dudaba de la confiabilidad de Smartmatic en Estados Unidos. Aviel Rubin, profesor de ciencias de la computación de la Universidad John Hopkins, en Baltimore, y uno de los más reconocidos expertos en sistemas electrónicos automatizados, advirtió que el nuevo sistema contratado por el CNE de Venezuela no era invulnerable.

“El referéndum de Venezuela tiene que ser la más sencilla elección de la que he oído hablar, SI versus NO. Y una boleta de papel con un conteo manual de votos sería la forma más transparente de tener estas elecciones”, dijo Rubin<sup>18</sup>.

Las críticas vertidas contra Smartmatic en Venezuela y Estados Unidos no iban a ser las únicas. Nuevas vinculaciones peligrosas y escándalos estaban por tocar a la puerta de la pequeña firma de Boca Ratón.

### Conexiones reveladoras

La falta de confiabilidad y las críticas sobre Smartmatic no se debían únicamente al ocultamiento deliberado de relaciones que suponían un abierto conflicto de intereses, como en el caso de la relación Bizta-gobierno, sino a la forma como sus directivos respondieron a las críticas sobre la falta de experiencia electoral de Smartmatic.

Cuando el autor preguntó en abril de 2004 a Alfredo Anzola en Boca Ratón sobre la falta de trayectoria electoral de la firma, su respuesta fue airada: “es falso que no tengamos experiencia electoral”. Inmediatamente explicó que contaban con un equipo “que ha participado en 63 procesos electorales en 23 países”<sup>19</sup>.

Pero tal respuesta era, en realidad, una verdad a medias.

Desde su creación en el 2000, Smartmatic nunca había conducido elecciones ni en Venezuela ni en cualquier otra parte del mundo. Pero para eliminar toda clase de sospechas si ganaban el contrato con el CNE, la firma contrató al especialista Jorge Tirado, director de la empresa de asesoría electoral Caribbean Government Consultants, con sede en Puerto Rico, y viejo contratista del International Foundation

for Election Systems (IFES), un organismo del gobierno norteamericano con sede en Washington que promueve elecciones democráticas en el mundo.

Era Tirado, y no Smarmatic, quien había participado en 63 procesos electorales. Pero su participación no había sido como organizador, sino como simple observador enviado por IFES<sup>20</sup>.

El contrato de \$91 millones con el organismo electoral venezolano estipulaba el compromiso de Smartmatic de diseñar y producir 20,000 máquinas de votación con pantallas sensibles al tacto.

Pero Smartmatic tampoco tenía una infraestructura de fabricación de las máquinas, por lo cual contrató a otra compañía para cumplir con sus obligaciones. La firma seleccionada fue la italiana Olivetti Tecnost, que no tenía una experiencia fabricando máquinas electorales, sino terminales electrónicos para juegos de lotería.

Lo que Smartmatic ofreció como el último modelo de su máquina *touchscreen* SAES-300 era en realidad una versión reacondicionada del modelo MAEL 205, fabricado por Olivetti como una máquina electrónica para juegos de lotería.

“Las máquinas por medio de las cuales los venezolanos vamos a decidir nuestro destino el 15 de agosto son máquinas de lotería en Perú, India y Túnez. En Túnez las adquirió Promosport en sociedad con el Ministerio de Deportes de ese país; y en India las adquirieron dos compañías especializadas en juegos de envite, azar y entretenimiento”, dijo el analista Orlando Ochoa Terán, que reveló por primera vez los detalles de la plataforma tecnológica que Smartmatic estaba ofreciendo a partir de máquinas de lotería<sup>21</sup>.

La propia Olivetti reconoció la crítica. La máquina de votación que iba a ser usada en Venezuela, declaró Alvaro Fernández, gerente de Olivetti Tecnost de Argentina, “nació como una terminal de lotería on line, pero al ser tan versátil, se puede utilizar para distintas funciones, como en este caso que se empleará para realizar una votación electrónica”<sup>22</sup>.

Además de los lazos entre Smartmatic y el consorcio Bizta, donde el gobierno era propietario de un tercio de las acciones, aparecían ahora más conexiones que implicaban relaciones directas e indirectas con personeros del gobierno.

Por ejemplo, la operación que selló la compra del 28% de las acciones de la corporación Bizta por parte de la empresa Sociedad de Capital de Riesgo C.A., a un monto de unos \$200,000, fue notariada legalmente en el Registro Mercantil Quinto de Caracas, al frente del cual estaba Gisela Rangel de D’Armas, hija del vicepresidente José Vicente Rangel<sup>23</sup>.

Uno de los fundadores de Smartmatic, Alfredo Anzola, había contraído nupcias dos meses antes de la firma del contrato Smartmatic-CNE, en abril de 2003<sup>24</sup>, con la hija de Antonio José Herrera, asesor en el área agrícola del gobierno de Chávez.

Herrera fue uno de los más importantes consejeros del ministro de Agricultura Alejandro Riera en los inicios de la administración chavista, y era primo hermano del embajador de Venezuela en Washington, Bernardo Alvarez Herrera.

Cuando el autor preguntó al embajador Alvarez la naturaleza de su parentesco familiar con el fundador de Smartmatic, éste respondió que Antonio José Herrera era sólo uno de un extenso grupo de “55 primos hermanos” que tenía en Venezuela<sup>25</sup>.

“En efecto, la hija de uno de mis 55 primos hermanos está casada con el Sr. Anzola, a quien creo haber visto no más de un par de veces hace algunos años, en reuniones familiares, cuando ambos eran unos jóvenes adolescentes, y me he enterado por la prensa de la relación de este joven venezolano con la empresa Smartmatic”, dijo Alvarez Herrera.

El diplomático agregó que había mantenido relaciones “absolutamente institucionales” con la actual directiva del CNE, y argumentó que no se podía deducir una relación familiar “sin la existencia de evidencia alguna, una conducta ilegal e inmoral de tráfico de influencias”.

Sin embargo, para algunos observadores y analistas, las conexiones familiares y políticas en torno a Smartmatic formaban parte de una estrategia para influir en los procesos electorales en Venezuela.

“Hay un círculo de relaciones que tiene su origen en Barquisimeto y Carora, dos ciudades del estado Lara, en el centro occidente de Venezuela, que une a altos funcionarios de gobierno, el CNE, políticos y directivos de Smartmatic, un flagrante y sospechoso conflicto de intereses”, dijo el investigador Ochoa Terán.

#### El referéndum de 2004

La primera prueba crucial de Smartmatic se produjo durante el referéndum revocatorio de agosto de 2004, en el que unos 10 millones de votantes debían decidir si estaban de acuerdo o no con la salida de Chávez de la presidencia de Venezuela.

Tras una serie de pruebas técnicas con la intervención de organismos e ingenieros independientes, incluyendo una misión de supervisión del Centro Carter y la OEA, Mugica declaró satisfecho que resultaba “imposible vulnerar el secreto del voto” empleando las máquinas de lotería, y que su sistema era “ el más seguro” de todos los que se habían utilizado en Venezuela en cualquier época.<sup>26</sup>.

El Centro Carter le dio el espaldarazo. Las máquinas “funcionarán proveyendo seguridad y protegiendo la privacidad del voto”, dijo Francisco Diez, representante en Venezuela de la organización con sede en Atlanta<sup>27</sup>.

Debido a la crisis política que sacudía a Venezuela desde el golpe de abril del 2002, y el paro petrolero del 2003, las presiones internacionales estaban tratando de lograr un ambiente confiable para la realización del referéndum.

Para garantizar el éxito, varios sectores promovieron la participación de un grupo de notables, entre ellos el escritor Gabriel García Márquez, el economista Joseph Stiglitz, los dirigentes Nelson Mandela y Mijail Gorbachov, y los activistas Adolfo Pérez Esquivel y Rigoberta Menchú, todos ganadores del premio Nobel<sup>28</sup>.

Sin embargo, la realización de la consulta, y principalmente los momentos cruciales del conteo de votos, que se prolongó inusualmente durante más de 5 horas desde la noche del domingo 15 de agosto hasta bien entrada la madrugada del lunes 16, generaron grandes sospechas de que los resultados habían sido manipulados.

Cuando los números de la votación fueron leídos por el presidente del CNE, Francisco Carrasquero, a las 3:50 de la madrugada del lunes 16, había un ganador: con el 59.10% de los votos a favor, y 40.64% en contra, Chávez podía continuar hasta el final de su mandato.

El resultado fue respaldado posteriormente por el propio ex presidente norteamericano Jimmy Carter, los expertos del Centro Carter y el secretario general de la OEA, César Gaviria, quienes acudieron a la sede del CNE en Caracas para verificar las cifras oficiales.

“Las elecciones del 15 de agosto expresaron claramente la voluntad del electorado venezolano”, sentenció posteriormente el Centro Carter, en su informe final de observación de las elecciones en Venezuela. El reporte indicó además que el centro no recibió “evidencia creíble de fraude que hubiera cambiado el resultado de la votación”<sup>29</sup>.

Durante los días que siguieron al referéndum, sin embargo, surgieron importantes alegaciones de que las máquinas de Smartmatic no sólo eran vulnerables, sino que los mismos resultados pudieron haber sido modificados a voluntad.

Las primeras dudas serias sobre la fiabilidad de los resultados provinieron de la firma de consultoría electoral Penn, Schoen & Bertland, con sedes en Washington y Nueva York. Hacia las 7 y 3 del mismo domingo de las elecciones la firma consultora puso a circular los resultados de una encuesta a boca de urna (*exit poll*) que había realizado a nivel nacional.

Utilizando una técnica que había producido resultados exitosos en escenarios similares en México y República Dominicana, la empresa condujo mediciones en 200 centros de votación en Venezuela, con un total de 20,000 respuestas de votantes. Las cifras que resultaron de los exit polls daban un cómodo triunfo al SI, la opción opuesta a Chávez, en un porcentaje de 59%, versus 41 a favor del NO, favorable al gobierno,

casi exactamente contrario al resultado anunciado por el CNE, y certificado por Carter y Gaviria<sup>30</sup>.

Al día siguiente de las elecciones la oposición denunció que el gobierno había cometido fraude, y que la vulnerabilidad de la plataforma electoral de Smartmatic ayudó a modificar resultados.

Mugica respondió afirmando que el sistema había funcionado “a la perfección”, y ofreció realizar verificaciones y auditorías a las máquinas, “hasta eliminar cualquier duda razonable sobre este evento”<sup>31</sup>.

La auditoría que finalmente tuvo lugar, bajo control del CNE, se realizó entre apenas unas 400 máquinas de las 19,000 utilizadas en el evento comicial, una cantidad considerada por expertos como insignificante para descartar un eventual fraude.

Ni las denuncias de la oposición ni la restringida auditoria que permitió el CNE evitaron el reconocimiento internacional del triunfo de Chávez en el referéndum.

#### Las discrepancias del voto

Para eliminar cualquier vestigio de dudas, Mugica retó a la oposición a que demostrara científicamente, con “sustentación probatoria”, la ocurrencia de un fraude electoral a través de la plataforma tecnológica creada por Smartmatic.

La respuesta al reto vino en poco tiempo, de un grupo de expertos venezolanos formados en Estados Unidos.

María Mercedes Febres Cordero, ingeniera de computación con estudios de postgrado en la Universidad de Nueva York (NYU), introdujo la primera duda razonable sobre

un potencial fraude, al afirmar que las máquinas de votación eran capaces de comunicarse de forma bidireccional, es decir que podían enviar o recibir datos siguiendo instrucciones remotas, una característica que desde el principio fue negada tanto por Mugica como por Rodríguez.

Febres Cordero dijo que la firma de Boca Ratón había cambiado los patrones de transmisión de datos, indicando que las máquinas habían transmitido los datos al centro de totalización del CNE, antes de imprimir las actas de votación, con lo cual creó una “duda técnica razonable”.

“Es muy distinto que cada máquina por sí sola haya impreso su reporte y después se haya conectado, que lo contrario. Al momento de conectarla, le abres la posibilidad de que le entre un virus”, explicó<sup>32</sup>.

En otras palabras, Febres Cordero dijo que esta modificación del procedimiento estipulado por Smartmatic pudo haber permitido una intervención externa que modificara los resultados totales antes de ser imprimidos en el acta final de votos.

Poco tiempo después, en un comunicado, la telefónica Cantv admitió la bidireccionalidad de las máquinas de Smartmatic. “Los equipos terminales involucrados establecen sesiones necesariamente de carácter bidireccional, porque se requiere la identificación y el reconocimiento mutuo de las máquinas para establecer la comunicación”, indicó el comunicado<sup>33</sup>.

El abogado opositor Tulio Alvarez denunció que la admisión por parte de Cantv de la bidireccionalidad de las máquinas de votación constituía una violación de las leyes electorales, que establecen que la transmisión de datos debía producirse “una vez concluido el acto de escrutinio”<sup>34</sup>.

Veinte días después del referéndum, otros dos expertos, Ricardo Hausmann, académico de la Universidad de Harvard, y Roberto Rigobón, investigador del Massachusetts Institute of Technology (MIT), hicieron otra revelación explosiva: las probabilidades matemáticas de que se hubiera cometido un fraude electoral eran de 99%.

Tras un análisis estadístico de la data oficial del CNE, Hausmann y Rigobón encontraron un patrón de “alteración de resultados” en máquinas que podrían haber sido seleccionadas de forma aleatoria.

De acuerdo a la hipótesis de los académicos, el fraude se habría cometido debido a que desde el Centro de Totalización del CNE se envió información a las máquinas para modificar “de forma inteligente” los resultados, de modo que era difícil detectar.

Los hallazgos preliminares de Hausman y Ribogón fueron confirmados poco tiempo después por un nuevo estudio a cargo de otro grupo de académicos encabezados por Freddy Malpica, ex rector de la Universidad Simón Bolívar.

El estudio concluyó, entre otras cosas, que momentos antes del cierre de la consulta del 15 de agosto de 2004 se produjo un “tráfico inusual” y la “transmisión bidireccional de datos en volúmenes no esperados”<sup>35</sup>.

Los expertos encontraron que el 70% de las máquinas de votación no se comportaron “de acuerdo con los patrones esperados según la normativa electoral”. Revelaron también que, o bien el sistema fue administrado “con discrecionalidad”, o bien existía “más de una versión del sistema de votación-escrutinio instalada en las máquinas”<sup>36</sup>.

Tanto Smartmatic como el CNE respondieron a las acusaciones de fraude ratificando la solidez y transparencia del sistema de votación electrónica.

Rodríguez insistió en que, si bien las máquinas de votación tenían capacidad de enviar y recibir información, el software empleado “fue especialmente diseñado para evitar que esto ocurriera”<sup>37</sup>.

Mugica, por su parte, defendió una vez más la invulnerabilidad de su tecnología.

“El código fuente fue verificado por ingenieros independientes. Es virtualmente imposible, con los niveles de seguridad electrónica y copia almacenada de cada voto emitido, que los resultados sean falsificados. No podríamos alterarlos si tratáramos de hacerlo”, declaró Mugica a periodistas de la Florida<sup>38</sup>.

Las denuncias de presunto fraude multiplicaron las peticiones de investigar la actuación de Smartmatic en el proceso refrendario tanto en Venezuela como en Estados Unidos.

A mediados de septiembre, la Fiscalía General de Venezuela informó que había abierto una investigación contra Smartmatic, debido a dos denuncias específicas: sus relaciones con la empresa Bizta Corp, en la que el gobierno venezolano mantuvo un paquete accionario; y la posible vulnerabilidad del software que fue instalado en las máquinas de votación<sup>39</sup>.

El gobernador opositor del estado Bolívar, Antonio Rojas Suárez, dijo que si se demostraba la comisión de fraude electrónico, la oposición iba a formalizar una petición de investigación contra Smartmatic ante el Congreso norteamericano, invocando una posible violación a una de las leyes anticorrupción de Estados Unidos –la Foreign Corrupt Practice Act-, que prohíbe a empresas establecidas en territorio norteamericano participar en actos de corrupción en el extranjero.

“Hay un número de irregularidades que indican que las máquinas fueron utilizadas para manipular los resultados del referéndum, y esta manipulación ha sido suficiente para cambiar el final de las elecciones”, declaró Cristal Montañez, coordinadora internacional de la organización no gubernamental Resistencia Civil de Venezolanos en el Exterior (Recivex), con sede en Houston, que también solicitó una investigación congressional en conjunto con sectores opositores a Chávez<sup>40</sup>.

Otras organizaciones se unieron a Recivex. El 23 de agosto, las organizaciones no gubernamentales Free Venezuela, de Tampa, y Venezuela Awareness, de Miami, solicitaron al senador demócrata por la Florida, Bill Nelson, la apertura de una investigación sobre un presunto fraude electrónico del referéndum revocatorio realizado con las máquinas de Smartmatic.

Curtis Reed, director de Free Venezuela, pedía en específico al senador Nelson el “uso de sus influencias para iniciar una investigación y para presionar a Smartmatic a explicar en detalle todas las discrepancias” denunciadas por la oposición<sup>41</sup>.

A pesar de las presiones, las peticiones para investigar a Smartmatic no se tradujeron en resultados. Sin embargo, la polémica participación de la firma de Boca Ratón en el referéndum venezolano era apenas el primer capítulo de nuevos escándalos que Smartmatic estaba por enfrentar.

### Las insólitas maneras de Jorge Rodríguez

A las suspicacias generadas por la propia Smartmatic, se añadió la actuación del rector Jorge Rodríguez antes y después del proceso de licitación del contrato de \$91

millones, que introdujo especulaciones y desconfianza sobre la relación entre la firma de Boca Ratón y el chavismo, que nunca fueron aclaradas.

Rodríguez era hijo de un líder del mismo nombre, que perteneció a la agrupación de extrema izquierda Liga Socialista de Venezuela, y que murió violentamente tras ser detenido por la policía política venezolana en 1976<sup>42</sup>.

Desde su nombramiento en agosto de 2003 como rector del CNE, Rodríguez fue visto más como una persona cercana al chavismo que como una figura independiente.

Antes de convertirse en el intempestivo rector que ordenó la automatización del sistema electoral venezolano, conocido por su escasa paciencia y sus reacciones iracundas, Rodríguez ejerció privadamente la psiquiatría y fue profesor de postgrado en la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas. En su juventud fue dirigente estudiantil en la Universidad Central de Venezuela, la mayor universidad pública del país. En esa posición cultivó estrechas relaciones con otros dirigentes de la izquierda universitaria que luego se convertirían en importantes figuras del chavismo, como el ex alcalde de Caracas Juan Barreto, y la activista Anahí Arizmendi<sup>43</sup>.

Era difícil imaginar que, tras la fachada de político cerebral que exhibía Rodríguez, se escondía un amante de la literatura y un sólido narrador de cuentos cortos. Uno de sus más famosos, Dime cuántos ríos son hechos de tus lágrimas<sup>44</sup>, ganó en 1998 el prestigioso concurso de cuentos del diario El Nacional de Caracas, tras superar otras 900 historias que se habían postulado para la competencia<sup>45</sup>.

Su llegada a la escena política se produjo a mediados del 2003, cuando su nombre fue incluido entre los candidatos para integrar la directiva del organismo electoral venezolano, con apoyo del Movimiento V República, fundado por Chávez.

A partir de su nombramiento en agosto de 2003 como presidente de la Junta Electoral Nacional, el organismo encargado de organizar técnicamente los procesos electorales en Venezuela, grupos opositores comenzaron a advertir los notables esfuerzos de Rodríguez para obstaculizar el referéndum revocatorio del mandato de Chávez.

Por ejemplo, impuso obligatoriamente máquinas “capta huellas” durante el proceso de referéndum en agosto de 2004, con el argumento de que evitaban que una misma persona votara varias veces. Pero la oposición criticó la decisión porque aumentaba el tiempo de espera de los votantes, y estimulaba la abstención que favorecía al gobierno<sup>46</sup>.

Las sospechas sobre Rodríguez se incrementaron cuando una de las rectoras del CNE, Solbella Mejías, denunció que la decisión de escoger a Smartmatic se había tomado en reuniones “secretas”<sup>47</sup>.

“A pesar de mi insistencia, no fui convocada a ninguna de las reuniones efectuadas con las otras empresas, ni atendidas mis solicitudes orales para conocer los informes técnicos y legales surgidos de las mencionadas reuniones. Así se lo comuniqué a Rodríguez en sendos escritos enviados el 2 de diciembre de 2003 y el 21 de enero de 2004”, aseguró Mejías.

El triunfo obtenido por Chávez en el referéndum revocatorio en agosto de 2004 significó un ascenso en la carrera del rector Rodríguez. En enero de 2005, fue designado nuevo presidente del CNE<sup>48</sup>, un cargo que ejerció durante poco más de un año.

La desconfianza de la oposición frente a Rodríguez era de tal naturaleza, que fue la causa por la cual la oposición renunció a participar en las elecciones parlamentarias

de 2005, en las que el chavismo obtuvo el dominio casi absoluto de la Asamblea Nacional.

Las sospechas de que Rodríguez mantenía una estrecha vinculación con el régimen quedaron finalmente disipadas cuando, en enero de 2007, fue nombrado por Chávez como el nuevo vicepresidente de Venezuela.

“Es como si el magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, cuyo voto le valió la Casa Blanca a George W. Bush, un tiempo más tarde hubiera sido premiado con el cargo de vicepresidente”, criticó el ex ministro de comunicaciones Fernando Egaña<sup>49</sup>.

Nuevas vinculaciones entre Rodríguez y Smartmatic salieron a relucir posteriormente a la contratación de 2004.

Según una investigación que condujo el autor a fines de 2005, Smartmatic había pagado servicios de lujo a Rodríguez, entonces presidente del CNE, en un resort exclusivo de Boca Ratón.

Según documentos confidenciales, la firma tecnológica había pagado a Rodríguez y una acompañante la estadía, comidas y servicios de masajes en el Boca Ratón Resort & Club, un exclusivo complejo de descanso construido en 1926 al estilo morisco, y frecuentado por multimillonarios y estrellas como Robert Redford, John Travolta, Oprah Winfrey y Elton John.

En sus instalaciones funcionan una cancha de golf, un complejo de tenis y un famoso centro de belleza -SPA Palazzo- donde se aplican masajes con caviar sevruga, y tratamientos para la celulitis a base de hierbas exóticas.

La cuenta total del hotel pagada con una tarjeta de crédito de Smartmatic, por un monto de \$926.76, no especificó qué tipo de masajes habían ordenado Rodríguez o su pareja. La cifra incluyó pagos por desayunos y almuerzos y el consumo del mini bar en la habitación 1765, ocupada por el señor y la señora Rodríguez, según documentos en poder del autor.

La visita del presidente del CNE se produjo en abril de 2005, dos meses antes de que el organismo electoral aprobara un nuevo contrato de servicios de \$26.2 millones a Smartmatic<sup>50</sup>.

Las explicaciones ofrecidas, tanto por la firma electoral como por Rodríguez, fueron contradictorias y añadieron más confusión.

Uno de los voceros de Smartmatic, Mitch Stoller, envió al autor un correo electrónico explicando que la firma “pagó por los gastos de hotel del presidente Rodríguez durante su visita para revisar y evaluar nuestro más reciente sistema de votación electrónica. Ese pago es acostumbrado y apropiado”<sup>51</sup>.

El presidente del CNE, por su parte, aseguró que acudió a una cita en abril a la Florida a fin de participar en una reunión de trabajo “para evaluar el desarrollo de la máquina de votación SAE-3300”.

“Fui alojado en un hotel en la cercanía de la empresa y cancelé los consumos según consta en recibos en mi poder”, agregó Rodríguez<sup>52</sup>.

Sin embargo, los pagos al hotel fueron realizados con una tarjeta de crédito perteneciente a Antonio Mugica, según documentos en poder del autor.

Las denuncias de los pagos de lujo de Smartmatic a Rodríguez desembocaron en una petición de investigación a la Fiscalía General de Venezuela, introducida por el

diputado de oposición Oscar Pérez, bajo el argumento de que tal práctica violó la Ley Contra la Corrupción de Venezuela.

“Desde cualquier ángulo que se examine, la conducta del funcionario infractor es inaceptable. Si era un viaje por razones de servicio, le hubiese bastado obtener viáticos del ente que representa, pero de ninguna manera comportarse como un pedigüeño ante quien está supuesto a mantener una conducta erguida, decorosa, digna, que no deje fisuras, toda vez que mantiene intereses contrapuestos con el Consejo Nacional Electoral”, indicó la petición introducida por Pérez el 5 de diciembre de 2005.

Jorge Rodríguez y el Valijagate

Ese mismo año, en agosto, una denuncia periodística introdujo otros elementos inquietantes sobre la relación entre Smartmatic, Rodríguez y el gobierno chavista.

En agosto de 2005, se dio a conocer que Mugica había participado en una reunión secreta en Fuerte Tiuna, la base militar más grande de Venezuela, en la que participaron el presidente Hugo Chávez, el entonces presidente del CNE Jorge Rodríguez, el vicepresidente José Vicente Rangel y el ministro de la Defensa Orlando Maniglia, supuestamente para garantizar el triunfo oficialista en las elecciones parlamentarias de ese año.

El diputado chavista William Lara desmintió el encuentro de forma poco convincente, declarando que la nota publicada no incluía “dato concreto alguno” sobre la supuesta cita<sup>53</sup>.

Una conexión no menos explosiva e insólita de Rodríguez quedó al descubierto dos años después, en 2007, cuando ya no era presidente del CNE sino vicepresidente de Venezuela.

En diciembre de ese año resultó apresado en Miami Moisés Maionica, un abogado que había actuado al mismo tiempo como consejero legal de Smartmatic y asesor de Rodríguez en el CNE, y jugó un papel en el cierre del contrato de \$91 millones.

Maionica resultó implicado en el escándalo del *Valijagate*, el juicio iniciado en una corte federal de Miami contra un grupo de venezolanos que actuaron como agentes no registrados del gobierno de Hugo Chávez, en una serie de operaciones para “ocultar” el origen de una maleta con \$800,000 decomisada en agosto de 2007 al empresario venezolano americano Guido Antonini Wilson, presuntamente para financiar la campaña de la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner.

Maionica fue detenido en Miami tras organizar varias reuniones entre Antonini y Antonio Cánchica Gómez, un emisario de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), la policía política venezolana.

El objetivo de las reuniones era asegurar que Antonini nunca revelara el verdadero origen del maletín con el dinero, porque podría comprometer a altas figuras del gobierno venezolano.

Según documentos del juicio federal en Miami, Maionica le había confesado a Antonini que su participación en toda esta operación comenzó luego de una conversación que

mantuvo en forma simultánea en tres líneas con el vicepresidente Rodríguez y el entonces director de la Disip, Henry Rangel Silva <sup>54</sup> , en Caracas. En 2004, Maionica fue al mismo tiempo consultor legal de Smartmatic y asesor de Rodríguez cuando éste presidía la Junta Electoral Nacional, para la adquisición de las máquinas lectoras de huellas dactilares (capta huellas) a la firma Cogent Systems<sup>55</sup>. La relación entre Maionica y Rodríguez era tan estrecha que el ex presidente del CNE “utilizó una camioneta blindada Nissan, dos autos BMW y un Audi de Maionica, y los devolvió a su familia una vez desatado el escándalo en Miami”<sup>56</sup>. Las relaciones de Rodríguez con el caso del maletín influyeron en su despido como vicepresidente de Venezuela por parte de Chávez, y su pase a las “reservas ideológicas” del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

### Expansión en Estados Unidos

Apenas diez días después de culminado el proceso electoral en Venezuela, el 25 de agosto de 2004, Smartmatic anunció que estaba negociando tres contratos para vender su tecnología de elecciones en Estados Unidos.

Como presidente de la firma tecnológica que se encontraba en el ojo de las críticas, Mugica puso en marcha una maquinaria publicitaria para divulgar que el sistema de votación automática de Smartmatic no sólo era “el más seguro del mundo”, sino que estaba teniendo una demanda internacional que probaba su confiabilidad.

En un aviso de página completa en el diario The New York Times el 24 de agosto de 2004, la empresa de elecciones se ufanaba de haber operado un sistema electoral con “cero por ciento de margen de error”, y “ningún voto nulo”.

El aviso publicitario, publicado en la página 9 del rotativo neoyorquino, definía el sistema electoral de Smartmatic como “el más transparente, seguro y auditable sistema electrónico de votación del mundo”<sup>57</sup>.

Para dejar en claro que las investigaciones en torno a la actuación de la firma lo tenían sin cuidado, Mugica declaró a todo quien quizo oírlo que estaban dispuestos a cualquier indagatoria sobre su desempeño.

“Mientras más investigaciones se hagan, mejor para nosotros. Estamos abiertos a cualquier tipo de auditorías y sobre cualquier parte del sistema porque estamos seguros de lo que tenemos”, indicó Mugica<sup>58</sup>.

El interés de Mugica por lavar la imagen de su firma estaba basado en una razón de peso: Smartmatic estaba buscando una tajada de la torta de \$3,900 millones que el congreso norteamericano había aprobado para el año fiscal 2005, a fin de ayudar a los estados de la Unión en la transición hacia sistemas electrónicos de votación.

La empresa contrató los servicios de Jack Blaine y Robert Cook, ex altos ejecutivos del conglomerado tecnológico Unisys, para cabildear en Washington a favor de Smartmatic como firma de elecciones confiable<sup>59</sup>.

El resultado fue la adquisición, el 8 de marzo de 2005, de la firma Sequoia Voting Systems, con sede en Oakland, California. Smartmatic pagó un total de \$16 millones por Sequoia, el más antiguo fabricante norteamericano de equipos electorales con más de 100 años de experiencia.

La negociación estuvo dirigida por Blaine, a quien Mugica había designado como presidente de Smartmatic en Estados Unidos.

“Con la combinación de Sequoia y Smartmatic”, predijo Blaine, “estamos creando el primer líder verdaderamente global en ofrecer soluciones de votación electrónica verificada por los votantes”<sup>60</sup>.

La fusión entre Sequoia y Smartmatic tenía el objetivo de “servir mejor tanto a democracias establecidas como a las muchas nuevas que están naciendo hoy”, indicó por su parte Tracey Graham, presidente de Sequoia, sin un destello de ironía.

Por ninguna parte en la declaración oficial se mencionaba la actuación de Smartmatic en Venezuela. Se indicaba, en cambio, que la firma tenía una experiencia en ofrecer soluciones de votación “en América Latina”.

No era difícil entrever las ambiciones de Mugica y Anzola. Sequoia era la mayor contratista electoral en California, y tenía clientes en otros 19 estados. Por otra parte, desde que el gobierno norteamericano comenzó a promover en 2000 la transición a tecnologías electrónicas de votación, más de 1,000 condados en la nación estaban renovando sus sistemas eleccionarios.

El primer gran reto para el nuevo conglomerado Smartmatic-Sequoia vino a mediados del 2005, cuando selló dos contratos por valor de \$51.8 millones para conducir elecciones en Illinois.

El primero fue un convenio por \$23.8 millones con el departamento de elecciones del condado de Cook, firmado el 25 de mayo de 2005. El segundo fue un contrato de \$28 millones suscrito con la ciudad de Chicago, el 1 de junio de ese año.

Ambos contratos establecían un sistema híbrido, que combinaba máquinas *touchscreen* y lectores ópticos, bajo el control de expertos traídos especialmente por Smartmatic a Chicago.

Cuando cerró el último recinto en Chicago y en el condado de Cook el día de las elecciones primarias, el 21 de marzo de 2006, nadie anticipó el resultado final de la jornada.

La tecnología electoral que se había vendido como una de las más avanzadas del mundo terminó provocando un caos de tal naturaleza, que varios días después de las elecciones del 21 de marzo, más de 400 recintos electorales todavía no habían concluido el conteo de votos.

De acuerdo con un informe del Comité Conjunto sobre las elecciones del 21 de marzo, muchas de las máquinas llegaron a los recintos sin preparación. Adicionalmente, 252 máquinas usadas habían perdido sus cartuchos de memoria, mientras que los funcionarios de elecciones no pudieron encontrar los resultados de las votaciones en 162 recintos electorales.

La contribución tecnológica específica de Smartmatic, que era la transmisión de los datos vía celular, falló en numerosos centros de votación.

“En vez de enviar el total final de los votos vía tecnología celular, los cartuchos con la data fueron enviados vía taxi a la oficina central”, ironizó el reporte<sup>61</sup>.

Otras fallas resultaban particularmente sospechosas.

En un recinto electoral históricamente dominado por los demócratas, por ejemplo, las máquinas sólo contaban votos a favor del partido Republicano, a pesar de que los técnicos trataron de repararlas cuatro veces<sup>62</sup>.

Periodistas y observadores criticaron que los expertos encargados de controlar el proceso de conteo final eran todos extranjeros, en su mayoría venezolanos <sup>63</sup>, incluyendo a Roger Piñate, vicepresidente de operaciones especiales de Smartmatic. El fracaso electoral en Chicago rápidamente comenzó a producir críticas a la habilidad de Sequoia-Smartmatic en prestar un servicio confiable. También generó preguntas incómodas en torno a los verdaderos propietarios del conglomerado, no sólo entre periodistas y activistas que promovían la transparencia electoral, sino entre influyentes concejales y congresistas de Illinois.

¿Quién controla Smartmatic?

Tras el caos electoral en Illinois, el primero en alzar la voz fue el concejal Edward Burke, uno de los más poderosos concejales de Chicago. Fue el primero en lanzar la tesis que luego culminaría en una polémica investigación federal: el caos del conglomerado Sequoia-Smartmatic era parte de una “conspiración internacional para subvertir el proceso electoral en los Estados Unidos”<sup>64</sup>.

Burke, cuya esposa era miembro de la Corte Suprema de Justicia del estado de Illinois, acusó directamente a Chávez de urdir la conspiración, como parte de su enfrentamiento con el entonces presidente George W. Bush.

El concejal dijo también que en el proceso del conteo de votos habían participado 15 técnicos venezolanos, y sugirió la posibilidad de que hubiesen trabajado de forma ilegal durante el proceso electoral.

“No conozco a nadie que pudiera contratar una compañía cuyos propietarios están ocultos, y cuyas raíces se remontan a Venezuela, donde han estado involucrados con el dictador de Venezuela, de quien el secretario de Defensa (Donald) Rumsfeld dice que es un enemigo de los Estados Unidos”, indicó Burke<sup>65</sup>.

En respuesta, Jack Blaine, que entonces había sido designado como el presidente tanto de Smartmatic como de Sequoia, aseguró que no había ninguna conexión de la empresa con el gobierno venezolano.

“La habilidad de Chávez de estar manipulando el voto en Chicago es imposible”, dijo Blaine. El presunto caos electoral, argumentó, se debió a un error humano más que a problemas técnicos.

Blaine también dijo que los ataques contra los propietarios de Smartmatic eran pura discriminación basada en estereotipos, por el solo hecho de ser venezolanos<sup>66</sup>.

A partir de las declaraciones de Burke, la interrogante de quiénes eran los verdaderos propietarios de Smartmatic y Sequoia comenzó a dominar las controversias en Estados Unidos sobre el tema.

“Si el 11 de septiembre nos enseñó algo, es a sospechar de amenazas asimétricas por parte de entidades hostiles, sin importar el tamaño. Pudiéramos ser emboscados otra vez si el gobierno venezolano termina controlando nuestras elecciones”, advirtió un editorial del influyente diario Investor’s Business Daily<sup>67</sup>.

El tema no era nuevo. Ya en julio de 2005, durante las deliberaciones para firmar el contrato de \$23.8 millones con Sequoia, el concejal del condado de Cook, de Chicago, Peter Silvestri, lanzó la pregunta: “¿Quién es el dueño de Sequoia?”

La respuesta vino de David Orr, secretario administrativo del condado: “Smartmatic International, que es propiedad de una compañía de Holanda, es propietaria de Sequoia Voting Systems. Algunos inversionistas claves de dicha compañía holandesa son venezolanos”<sup>68</sup>.

La revelación inopinada de Orr, que había jugado un papel clave en la decisión de contratar a la empresa, llevó a reporteros y blogueros venezolanos a indagar en las enrevesadas conexiones de Smartmatic en Holanda<sup>69</sup>.

La firma había sido incorporada en Holanda con el nombre de Smartmatic International Holding B.V., el 18 de marzo de 1985, y con el objetivo de “comprar, desarrollar y manejar propiedades y bienes”.

Los registros indicaban que los accionistas habían hecho una modificación dos décadas después de la fundación de la compañía, el 13 de abril de 2005. Para esa fecha aprobaron la modificación de los estatutos, e inyectaron un capital social de 90,000 euros<sup>70</sup>.

Los documentos de la Cámara de Comercio de Amsterdam registraban además como accionista único a la firma Amola Investments N.V., una firma incorporada en el registro de la Cámara de Comercio de Curazao, bajo el número 91615. Pero en los registros mercantiles de Curazao el número de registro 91615 no correspondía a Amola Investments, sino a una firma con nombre diferente: Smartmatic International Group N.V.

Esta firma registrada en Curazao tenía a su vez como directores principales a uno de los fundadores de Smartmatic, Roger Piñate, y a otras dos firmas también registradas en esa isla: Curazao Corporation Company N.V., y la Netherlands Antilles Corporation

Company N.V. Ambas firmas registraban a un total de 28 representantes de otros accionistas. Estas personas que actuaban en nombre de los verdaderos dueños eran todos empleados de la empresa Curazao International Trust Co.

Por otro lado, la dirección de Smartmatic tanto en Holanda como en Curazao coincidía con la misma dirección de la firma Citco Group, un conglomerado holandés de servicios financieros que se especializa en clientes adinerados que buscan confidencialidad<sup>71</sup>.

Otras conexiones sospechosas salieron a relucir. Además de utilizar empresas europeas y caribeñas para organizar una compleja estructura corporativa, Smartmatic también desarrolló vínculos con firmas que en el pasado representaron los intereses del dictador indonesio Suharto, que utilizó un laberinto similar para ocultar el origen y el destino del dinero producto de la corrupción administrativa<sup>72</sup>.

Lo que aparecía como respuesta a la pregunta de quiénes eran los verdaderos dueños no quedaba suficientemente claro con esta estructura que enlazaba direcciones y subsidiarias desde Boca Ratón, sede de Smartmatic, y Delaware, donde se registró inicialmente, hasta Caracas, pasando por Willemstad, Amsterdam y Oakland, la sede de Sequoia.

La estructura era más compleja. Según documentos corporativos de Smartmatic a los que tuvo acceso el autor, ésta amplió su presencia a Barbados, adonde fue mudado el cuartel general por razones impositivas, y la isla portuguesa de Madeira, un conocido paraíso fiscal en Europa donde aparecen registrados cinco directivos de la firma como accionistas principales<sup>73</sup>.

Aunque la compleja arquitectura de propiedad de Smartmatic no mostraba vínculos visibles con el gobierno de Venezuela, según expertos en servicios financieros offshore, las estructuras basadas en lugares como Curazao están con frecuencia diseñadas para “esconder y proteger a los verdaderos dueños y los bienes de la compañía”<sup>74</sup>.

El tema de quién era el propietario real de Smartmatic, el comprador de la centenaria Sequoia, pronto llamó la atención de los grandes medios y de influyentes figuras congresionales, que comenzaron a mirar más de cerca a la firma de Boca Ratón.

#### Indagaciones federales

Lou Dobbs, controversial presentador del canal de noticias CNN, transmitió un programa bajo el título de “Democracia en Venta”, alertando sobre la potencial penetración en el sistema electoral norteamericano por parte de una firma con lazos aparentes con el gobierno venezolano.

“Sabemos con quiénes estamos lidiando, y es un gobierno disfuncional que está tratando de hacer precisamente lo mismo con las elecciones”, indicó Dobbs refiriéndose a Venezuela<sup>75</sup>.

La complicada estructura corporativa de Smartmatic llamó la atención particular de la congresista Carolyn Maloney, representante republicana por Nueva York, y miembro del comité congresional que supervisaba las inversiones extranjeras en Estados Unidos.

A principios de mayo de 2006, Maloney pidió al secretario del Tesoro, John Snow, investigar específicamente si la adquisición de Sequoia por parte de Smartmatic, una compañía sospechosa de tener lazos con el gobierno venezolano, había sido revisada por el Departamento del Tesoro y si había recibido la aprobación del Comité de Inversiones Extranjeras (Committee on Foreign Investments, CFIUS).

En una misiva enviada a Snow, la representante Maloney no se anduvo con rodeos y expresó de entrada su preocupación sobre “posibles inversiones del gobierno venezolano en Smartmatic”.

“Como puede imaginar”, le dijo Maloney a Snow en tono grave, “el tener un gobierno extranjero invirtiendo o como propietario de una compañía que suministra máquinas de votación para elecciones en Estados Unidos podría causar preocupación por la integridad de las elecciones realizadas con esas máquinas”.

La congresista quería saber si el proceso de compra-venta de Sequoia a Smartmatic había sido revisado por CFIUS y si se habían cumplido las normas para proteger los intereses de Estados Unidos.

El inicio de la investigación coincidió con la firma de acuerdos de cooperación militar entre Chávez y Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, y el cierre en Rusia de un acuerdo por \$1,000 millones para la compra de aviones de combate rusos, un acuerdo criticado por los medios norteamericanos<sup>76</sup>.

La presión de Maloney era una consecuencia directa de la controversia que surgió por la aprobación en 2005 del traspaso del manejo de los puertos de Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, Baltimore, Nueva Orleans y Miami, hasta entonces controlado por la británica Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (P&O), al

conglomerado extranjero Dubai Ports World, propiedad del gobierno de los Emiratos Arabes Unidos, a cambio de \$6,800 millones.

La transferencia del control de siete de los más grandes puertos norteamericanos a una entidad extranjera encendió las alarmas en el congreso, en gran parte debido al temor de congresistas de que el acuerdo haría a Estados Unidos más vulnerable a ataques terroristas.

Eventualmente, el congreso aprobó una legislación destinada a descarrilar el acuerdo firmado entre Dubai Ports World y P&O, pero antes de que se aplicara, el gobierno de Dubai decidió ceder el control de los puertos a la firma norteamericana AIG Global Investment Group<sup>77</sup>, terminando la controversia.

Algunos analistas establecieron el paralelismo entre el caso de Dubai Ports World y Smartmatic, y la gravedad que suponía la adquisición de Sequoia para la seguridad del sistema electoral norteamericano.

“El congreso ha dedicado dos semanas reaccionando exageradamente a la noticia de que Dubai Ports World operaría siete puertos estadounidenses, incluyendo el de Miami, pero un mejor objetivo para su histeria sería la adquisición por parte de Smartmatic International de la firma Sequoia Voting Systems, de California, cuyas máquinas sirven a millones de votantes norteamericanos”, escribió el periodista Richard Brand<sup>78</sup>.

La negociación entre Sequoia y Smartmatic, realizada en marzo de 2005, nunca “recibió ningún escrutinio” por parte de CFIUS para determinar si implicaba riesgos para la seguridad nacional, aseguró Brand.

De hecho, la congresista Maloney temía que el Departamento del Tesoro hubiese obviado una exhaustiva revisión de los riesgos para la seguridad de Estados Unidos en la negociación Smartmatic-Sequoia, incluyendo posibles lazos con un gobierno hostil a Washington.

“La naturaleza opaca de la propiedad de Smartmatic es particularmente perturbadora ya que Smartmatic ha sido asociada por la prensa con el gobierno venezolano encabezado por Hugo Chávez, que es abiertamente hostil a Estados Unidos”, escribió Maloney en una carta enviada al secretario del Tesoro Henry Paulson, en octubre de 2006, para solicitar información sobre el estado de las investigaciones en torno a la firma de Boca Ratón.

Maloney le dijo a Paulson que Smartmatic podría suponer un riesgo para la seguridad nacional ya que las máquinas electrónicas podrían ser intervenidas para modificar los resultados.

También lamentó que hasta ese momento Smartmatic hubiera “fallado en responder totalmente” a las preguntas sobre quienes controlaban realmente la compañía<sup>79</sup>.

Lo que estaba en juego no era poco. Como empresa de elecciones, Sequoia operaba máquinas de votación en 17 estados, incluyendo cuatro condados en la Florida, donde estaba el cuartel general de Smartmatic. Adicionalmente, iba a jugar un papel en las elecciones legislativas de noviembre de 2006, consideradas claves para las elecciones presidenciales del 2008.

Algunos críticos temían que, si se demostraba que el gobierno venezolano estaba involucrado, Smartmatic podría ser un caballo de Troya diseñado para avanzar la

agenda antinorteamericana de Chávez, en el corazón del sistema electoral de Estados Unidos<sup>80</sup>.

El departamento del Tesoro tomó la rara decisión de iniciar formalmente la investigación en torno a la venta de Sequoia a Smartmatic. “Es muy inusual que el Departamento del Tesoro retroceda e investigue a una compañía que ya ha sido vendida, pero lo están haciendo en este caso”, declaró la congresista Maloney<sup>81</sup>.

En su defensa, Smartmatic argumentó que los productos y servicios ofrecidos por Sequoia no debían ser incluidos “dentro de los parámetros de los asuntos gobernados por CFIUS”, relativos a la seguridad nacional, dijo Antonio Mugica en una conferencia de prensa en octubre de ese año.

Mugica volvió a insistir además en que “ningún gobierno extranjero de ningún país ha tenido alguna vez acciones en Smartmatic”.

Jeff Bialos, abogado en Washington de la firma de Boca Ratón, declaró que tanto Smartmatic como Sequoia habían pedido voluntariamente al gobierno federal la investigación para aclarar las “infundadas acusaciones” que han afectado “persistentemente” a ambas firmas.

“La compañía tiene una política de total apertura con respecto a estos temas”, dijo Bialos<sup>82</sup>.

Nuevas acusaciones

El panorama de las indagaciones, sin embargo, se complicó cuando se conoció que otros dos organismos federales habían iniciado por separado nuevas pesquisas relacionadas con Smartmatic y sus directivos.

Agentes del Departamento de Rentas Internas (IRS) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) comenzaron a investigar operaciones financieras aparentemente irregulares.

Un grupo de personas familiarizadas con las operaciones financieras internas de Smartmatic habían denunciado que la firma de Boca Ratón había pagado una comisión multimillonaria a un conocido ex militar venezolano a fin de obtener un contrato de \$90 millones con el CNE para automatizar la votación durante el referéndum del 2004.

Por su parte, el IRS buscaba establecer si la empresa había dejado de pagar al fisco estadounidense más de \$12 millones en impuestos en los últimos dos años, incluyendo unos \$4 millones que supuestamente transfirió a la casa matriz del holding en Barbados, de los fondos obtenidos por el segundo contrato que ganó con el CNE para las elecciones regionales del 2004 en Venezuela.

Smartmatic calificó las acusaciones de “alegaciones sin fundamento”, y las atribuyó a dos ex empleados despedidos por la firma<sup>83</sup>.

Las dos indagaciones federales, iniciadas en Washington, el sur de la Florida y Caracas, trataban de determinar si el complejo esquema de compañías creadas por Smartmatic en Curazao, Holanda, Barbados y en el estado de Delaware, supuestamente contribuyó a que la firma evadiera impuestos o si, por el contrario, las operaciones financieras fueron transparentes y legales.

Según los documentos a los que tuvo acceso el autor, Smartmatic realizó siete pagos a Morris Loyo, un capitán retirado de la Fuerza Aérea Venezolana con amplias conexiones en el gobierno chavista antes de realizarse el referéndum revocatorio. Los pagos presuntamente no habían sido reportados al IRS.

De acuerdo con los documentos, Smartmatic ordenó otros dos pagos a Loyo, una vez concluido el evento revocatorio, que sí fueron declarados al IRS, y que formaban parte de un contrato entre Smartmatic y el ex militar. En este acuerdo se estipulaba una comisión de ventas de \$1.5 millones por haber ayudado a obtener el contrato de poco más de \$90 millones para el referéndum.

En total, la firma de Boca Ratón pagó a Loyo \$4,128,850 a través de nueve transferencias a una cuenta del ex militar en el Banco Hapoalim B. M. en Nueva York, indicaron los papeles.

Smartmatic argumentó que Loyo había trabajado para la firma como cabildero y contratista independiente, a fin de “ayudar a asegurar contratos electorales en Venezuela, de la misma forma que muchos vendedores norteamericanos emplean a cabilderos estatales y vendedores para que ayuden a conseguir contratos”<sup>84</sup>.

Loyo nunca respondió públicamente ni al autor sobre las alegaciones en su contra.

Otra de las investigaciones del FBI se refería a una denuncia presentada a esa agencia a mediados del 2005 por un ex empleado de Smartmatic, Leonardo Riera, sobre presuntas amenazas de muerte proferidas en su contra por Mugica.

Riera había ocupado posiciones administrativas en la empresa durante varios años, y había cuestionado algunas prácticas administrativas que consideraba irregulares.

Las denuncias alegaban que el presidente de Smartmatic habría advertido a Riera sobre el “peligro” de que se filtrasen documentos internos al dominio público. Según el testimonio de Riera, Mugica también le había advertido sobre sus relaciones estrechas con la Disip, la policía política del gobierno chavista.

“He sido amenazado de muerte, y lo he denunciado ante las autoridades federales, con las cuales he colaborado activamente en las investigaciones”, aseveró Riera en una entrevista con el autor.

Otro empleado que rehusó identificarse confirmó las denuncias de Riera y dijo que también había recibido una amenaza velada por parte de Mugica, y que temía ser objeto de represalias por sus críticas al estilo administrativo de los directivos de Smartmatic.

Mugica negó categóricamente haber amenazado a Riera ni a ningún otro empleado de la firma de elecciones.

“No he hecho amenazas [de muerte] ni ahora ni nunca a ninguno de mis empleados. Todos los que me conocen, la mayoría de los empleados que me conocen, saben que esto no está absolutamente en mi naturaleza”, aseguró Mugica.

El alto ejecutivo de Smartmatic basó en parte su defensa contra las acusaciones de Riera en el hecho de que era una persona que profesaba el vegetarianismo, debido a su oposición a matar animales para consumirlos como alimento.

“No creo que siquiera está justificado matar un pez para alimento. Ir en contra de una persona es algo impensable para mí”, argumentó Mugica<sup>85</sup>.

Las indagatorias encabezadas por el IRS buscaban determinar si se había producido un supuesto fraude fiscal en dos auditorías de la corporación realizadas en el 2004 por una empresa de contabilidad de Miami.

Según un dossier de documentos a los que tuvo acceso el autor, la firma Morrison, Brown, Argiz & Farra, LLP, certificó dos auditorías aparentemente contradictorias de las finanzas de Smartmatic durante 2004.

Según la primera auditoría, titulada “Smartmatic LLC (A Wholly-Owned Subsidiary of Smartmatic International Corp.) Financial Statements”, del 31 de diciembre del 2004, la firma debía pagar un total de \$4,073,809 en impuestos al IRS sobre los ingresos obtenidos de un segundo contrato de \$26 millones con el CNE de Venezuela. No obstante, en una segunda auditoría, titulada “Smartmatic International Corporation and Subsidiary (A Wholly-Owned Subsidiary of Smartmatic International Holdings, B.V.), Consolidated Financial Statements”, con la misma fecha que la del párrafo anterior, la cifra a pagar en impuestos aparecía reducida a apenas \$479,653, una diferencia de \$3.6 millones con respecto a la primera auditoría.

De acuerdo con la indagación federal, el cambio de los montos a pagar en impuestos se produjo luego de que se firmara un Acuerdo de Servicio entre Smartmatic International Corporation, registrada en Barbados como la Casa Matriz, y Smartmatic LLC, registrada en el estado de Delaware. El Acuerdo se firmó el 25 de marzo de 2005, después que tuvieron lugar las operaciones por las cuales se estaba pagando impuestos.

La respuesta de la firma sobre el tema fue directa: “Ya sea en el 2004 o en cualquier otro año, Smartmatic siempre ha pagado todos sus impuestos debidos y adeudados

en las jurisdicciones donde opera. Al presentar declaraciones de impuestos del 2004 y de otros años, Smartmatic siempre ha recibido el consejo de los mejores profesionales, incluyendo firmas legales y de contabilidad”, precisó la declaración.

“Hemos provisto y revelado absolutamente todas nuestras transacciones”, agregó Mugica.

Smartmatic también informó entonces que había declarado al IRS un total cercano a los \$97 millones en contratos recibidos en el 2004, “por trabajo electoral realizado fuera de los Estados Unidos, y por entidades no estadounidenses de Smartmatic”.

Las conclusiones de las investigaciones de CFIU, el FBI y el IRS nunca se dieron a conocer. Antes de que se hicieran públicos los resultados de las indagatorias federales, Smartmatic hizo un anuncio inesperado.

Fuera del juego

“Smartmatic Corporation y Sequoia Voting Systems estarán trazando nuevas direcciones corporativas en 2007 que posicionarán ambas compañías para un amplio crecimiento en el mercado mundial”, declaró un comunicado de Smartmatic emitido el 22 de diciembre de 2006, desde Boca Ratón.

Fue el eufemismo que usaron los directivos de la firma de elecciones para informar sobre la decisión de buscar un comprador para la empresa Sequoia, y salir del mercado norteamericano de elecciones.

El anuncio tenía en realidad otro objetivo: detener las investigaciones federales en torno a Smartmatic que se habían iniciado a mediados de 2006.

El anuncio de Smartmatic se produjo luego que CFIUS aceptó permitir a la firma retirarse del proceso de revisión a cambio de buscar un comprador norteamericano para Sequoia, informó Brookly McLaughlin, vocera del Departamento del Tesoro. McLaughlin aclaró sin embargo que CFIUS iba a supervisar detalladamente ese proceso de venta<sup>86</sup>.

Mugica justificó la decisión basándose en la “actual preocupación y en el debate público suscitado por el hecho de que empresas extranjeras sean propietarias de compañías estadounidenses en áreas críticas, como la tecnología de elecciones”.

La venta de Sequoia se anunció finalmente casi un año después, en noviembre de 2007, “a un grupo de inversionistas privados estadounidenses”.

“Smartmatic vendió Sequoia Voting Systems a un grupo de inversionistas privados estadounidenses integrados por el actual equipo gerencial ejecutivo, dirigido por el presidente de Sequoia Jack Blaine, y el jefe de finanzas Peter McManemy”, indicó la declaración oficial de la venta<sup>87</sup>.

En un tono de suficiencia, Mugica puso punto final a la polémica y breve pasantía de Smartmatic por el mercado electoral de Estados Unidos con una declaración: “Después de este proceso de venta, Smartmatic, más sana que nunca, concentrará todos sus esfuerzos en el mercado internacional, capitalizando las enormes, desaprovechadas oportunidades que ofrece. Nuestros clientes en el resto del mundo se beneficiarán antes de nuestros últimos desarrollos, a medida que seamos capaces de llevar más pronto nuestros productos al mercado. Cuando el mercado de Estados Unidos esté listo para adoptar algunas de las innovaciones que hemos planeado para el futuro, nos encantará ayudar otra vez”.

Significativamente, la polémica generada por Smartmatic en el campo electoral norteamericano ayudó a aprobar de manera abrumadora la Ley de Inversiones Extranjeras y Seguridad Nacional de 2007 (FINSA), no por casualidad corredactada por la congresista Maloney<sup>88</sup>.

Gracias a Maloney y a la controversia generada por casos como Dubai Ports World y Smartmatic, FINSA cambió radicalmente el proceso de revisión de las inversiones controladas por personas o gobiernos extranjeros en Estados Unidos<sup>89</sup>.

### Tragedias y problemas legales

El 28 de abril de 2008, la tragedia tocó por primera vez la puerta de la firma de elecciones, en un episodio que no dejó de producir escándalo en Venezuela y en Estados Unidos.

La avioneta donde volaba el vicepresidente de Smartmatic, Alfredo Anzola, que acababa de salir en la mañana del lunes 28 desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, en la capital venezolana, con rumbo a la isla de Curazao, se precipitó a tierra, cayendo sobre un conjunto de viviendas humildes de Catia La Mar.

Anzola, de 34 años, fue trasladado a un hospital cercano en un helicóptero enviado por órdenes del gobernador del estado Miranda, Diosdado Cabello, considerado uno de los hombres más poderosos del chavismo.

Anzola murió al día siguiente debido a lesiones graves. Antes de fallecer, recibió la visita de Jorge Rodríguez, ex presidente del CNE, cuyas relaciones con Smartmatic no dejaron de provocar críticas<sup>90</sup>.

Entre los otros cinco fallecidos, se encontraba Mario Donati, de 43 años, que era el piloto de la aeronave.

Como se reveló posteriormente, Donati tenía un historial delictivo notable. Había sido condenado en febrero de 1999 por una corte federal de la Florida a tres años de prisión por cargos de narcotráfico.

Luego de cumplir con la sentencia, fue condenado en otro caso por transporte ilícito de drogas en Venezuela, donde se le concedió la libertad vigilada en abril del 2007, pero con prohibición de salida del país<sup>91</sup>. Nunca se supo por qué Donati estaba piloteando la aeronave que conducía a Anzola a Curazao.

Ni siquiera la venta de Sequoia por parte de Smartmatic acabó con las polémicas en torno a la empresa de elecciones. El proceso legal de venta no separó una empresa de la otra, sino que cambió los términos de la relación a través de, una vez más, complicados procedimientos jurídicos para ocultar la naturaleza de los vínculos.

Tales conexiones, sin embargo, salieron a relucir durante un juicio mercantil en la Corte de la Cancillería del estado de Delaware, donde está registrada Smartmatic.

De acuerdo con la sentencia de la Corte de Delaware, tras la supuesta venta de Sequoia a un grupo de inversionistas encabezados por Jack Blaine, Smartmatic conservó una nota promisorio (promissory note) por valor de \$2 millones en acciones de Sequoia, que podía vender a un tercero si se cumplía con una serie de condiciones.

La venta de estas notas se produjo finalmente en abril del 2008, cuando Smartmatic las negoció con la firma Hart InterCivic Inc., la cuarta mayor firma de elecciones de Estados Unidos, con sede en Austin, Texas. El acuerdo de venta, aprobado por Sequoia, obligaba a la firma texana a pagar \$7 millones a Smartmatic en un primer desembolso,

así como el 40% del ingreso neto combinado de Hart y Sequoia por los siguientes cinco años (hasta el 2013), con la promesa de pagar como mínimo \$9 millones en esos cinco años, para completar el valor que Smartmatic había pagado por Sequoia en 2005, de \$16 millones<sup>92</sup>.

El acuerdo, alcanzado luego de un intento hostil de control de Sequoia por parte de la empresa texana, incluyó el compromiso de Hart InterCivic de no competir con Smartmatic en el mercado de elecciones de toda América Latina, Filipinas y Bélgica. Las negociaciones de Smartmatic con Sequoia y Hart fueron monitoreadas por la congresista Maloney para determinar si constituía una violación al compromiso de la firma de Boca Ratón de desvincularse totalmente de Sequoia, y salir del mercado norteamericano de elecciones<sup>93</sup>.

Un segundo juicio legal, esta vez en Nueva Jersey, reveló nuevos detalles que Smartmatic quería mantener ocultos.

El juicio se inició como consecuencia de los aparatosos fallos de las máquinas sensibles al tacto provistos por Sequoia, durante las votaciones del 5 de febrero de 2008, cuando tuvieron lugar las primarias para las elecciones presidenciales de ese año, un evento conocido como el Super Martes.

Ese día, las máquinas de Sequoia no se encendieron en muchos lugares, mientras que en otros totalizaron los votos de manera errónea.

Hasta el propio gobernador de Nueva Jersey, John Corzine, se vio obligado a esperar 45 minutos hasta que la máquina en su recinto electoral, con tecnología de Smartmatic, le permitió ejercer su derecho al voto<sup>94</sup>.

En otro circuito, las máquinas cambiaban los votos emitidos para la candidata demócrata Hillary Clinton, a favor de su oponente Barack Obama, entonces candidato favorito para las elecciones presidenciales<sup>95</sup>.

El 8 de abril de 2008, la jueza superior Linda Feinberg ordenó a los funcionarios de elecciones en seis condados de Nueva Jersey entregar las 60 máquinas que realizaron conteos que no coincidían con los votos emitidos.

La jueza se proponía ordenar que un grupo de expertos evaluaran las máquinas y determinara si podían ser intervenidas para modificar los votos.

Sequoia reaccionó indicando que iba a pelear legalmente para evitar que los secretos de las máquinas fueran revelados tras la investigación, argumentando que ello constituiría una violación a la propiedad intelectual.

En realidad, los derechos de propiedad intelectual de las máquinas *touchscreen* de votación vendidas por Sequoia estaban bajo control de Smartmatic, como lo admitió el propio presidente de Sequoia, Jack Blaine<sup>96</sup>.

En otras palabras, aunque ambas compañías habían separado sus caminos en 2007, las miles de máquinas vendidas por Sequoia en 17 estados de la Unión operaban con el software y el hardware concebidos y elaborados por Smartmatic, similares a los utilizados en los cuestionados procesos electorarios en Venezuela.

### Escena internacional

Aunque Smartmatic dejó de operar en Estados Unidos en 2007, sus actividades internacionales continuaron teniendo resonancias en territorio norteamericano.

En 2009, logró obtener contratos por más de \$200 millones para participar en licitaciones vinculadas a tecnología electoral en países como Bolivia, Filipinas, México, Zambia y Bélgica.

En México, los propietarios presentaron a la firma como de origen holandés, y obtuvieron un contrato para proveer tecnología biométrica a la Secretaría de Gobernación (Segob) para la fabricación de cédulas de identidad, a pesar de no contar con experiencia en la materia<sup>97</sup>.

En mayo de 2010, un grupo de ciudadanos de Filipinas que eran también ciudadanos norteamericanos, encabezados por la empresaria Loida Nicolas-Lewis, presentó una solicitud en una carta enviada a congresistas norteamericanos y al propio presidente Barack Obama<sup>98</sup>.

El grupo de filipinoamericanos quería ayuda del gobierno norteamericano para investigar la estructura enrevesada del conglomerado, y el uso de firmas en Holanda, Curazao y Barbados para ocultar la verdadera propiedad del conglomerado.

En 2009 Smartmatic estableció una alianza en Filipinas con la firma TIM Corporation a fin de participar en un contrato por unos \$150 millones para modernizar el sistema electoral filipino. La empresa Smartmatic-TIM ganó la licitación y condujo varios procesos electorales. Las acusaciones de funcionamientos inadecuados de varias de las máquinas provistas por Smartmatic llegaron al congreso filipino<sup>99</sup>.

En Bélgica, la firma de elecciones ganó un contrato de diez años para organizar elecciones municipales, pero pronto comenzó a enfrentar problemas, pues las autoridades anunciaron que no iban a realizar el primer pago del contrato. La razón: el sistema de elecciones falló repetidamente sin aparentes explicaciones<sup>100</sup>.

Los problemas en Filipinas y Bélgica, que en 2013 continuaban generando debates y batallas legales, no inhibió a Antonio Mugica, a revisitar la idea de retornar al lucrativo mercado norteamericano de elecciones.

Mugica defendió ardorosamente la trayectoria “exitosa” en Venezuela y el compromiso de la polémica firma venezolana para proveer de tecnología avanzada de elecciones, “sin importar cuán pobre sea la nación o cuán manchada esté su cultura política pasada”, en un artículo publicado en el portal de The Hill, en octubre de 2012<sup>101</sup>.

El artículo generó una ola de críticas y un amplio recordatorio acerca de las sospechas en torno a los dueños verdaderos de Smartmatic que había provocado su salida de Estados Unidos<sup>102</sup>.

Las versiones de que una parte de las acciones de Smartmatic estaban bajo control directo del presidente Hugo Chávez nunca fueron confirmadas. Pero al momento de la salida de Smartmatic del mercado norteamericano, otra clase de negocios que sí estaban controlados directamente por el comandante revolucionario ya estaban penetrando importantes sectores de Estados Unidos, no con ayuda de la tecnología avanzada, sino con el poder de uno de las más cotizadas materias primas o *commodities*: el petróleo.

---

<sup>1</sup> Los registros de Smartmatic en el Departamento de Estado de Delaware pueden ser consultados en este portal: <https://delecorp.delaware.gov/tin/GINameSearch.jsp>.

<sup>2</sup> *Panagroup invierte Bs. 1 millardo en un nuevo plan de negocios*, Marianna Párraga, El Nacional, 1 de Junio de 2001.

<sup>3</sup> Los documentos de registro de Smartmatic, que son de carácter público, pueden encontrarse en el portal [www.sunbiz.org](http://www.sunbiz.org).

<sup>4</sup> *Vote Smart*, Van Hutchinson, South Florida CEO, Octubre de 2004.

<sup>5</sup> *Ibidem*.

<sup>6</sup> Ver: <http://www.smartmatic.com/company/board-of-directors/>.

---

<sup>7</sup> “Panagroup invierte...”, idem.

<sup>8</sup> Ibidem.

<sup>9</sup> Ricardo Escalante, *El CNE firmó contratos que afectan el interés de la República*, El Nacional, 20 de Julio de 1998.

<sup>10</sup> Ramón Navarro, *Proceso de automatización podría definirse esta semana*, El Nacional, 19 de Enero de 2004.

<sup>11</sup> Marianela Palacios, *Automatización de elecciones cuesta 111 millones de dólares*, El Nacional, 18 de febrero de 2004.

<sup>12</sup> Ver: <http://hbr.org/product/corporate-social-responsibility-at-cantv/an/SKE094-PDF-ENG>.

<sup>13</sup> *Doubts over touchscreen tech choice for Venezuela recall*, Alexandra Olson, cable de Associated Press publicado en USA Today, 12 de Julio de 2004.

<sup>14</sup> Richard Brand y Alfonso Chardy, *Venezuela Has Stake in Ballots*, The Miami Herald, 28 de Mayo de 2004.

<sup>15</sup> Ibidem.

<sup>16</sup> *Gobierno tiene acciones en empresa de automatización*, reproducción del artículo de Brand y Chardy de The Miami Herald por el diario El Nacional, el 29 de Mayo de 2004, con un apartado de respuesta por parte los directivos del consorcio SBC al artículo.

<sup>17</sup> Casto Ocando, *Senador alerta sobre fraude en Venezuela*, El Nuevo Herald, 25 de junio de 2004, p. 5A.

<sup>18</sup> Brian Ellsworth, *A crucial Vote for Venezuela and a Company*, The New York Times, 20 de Julio de 2004.

<sup>19</sup> Casto Ocando, *Firma floridiana puede tener un papel crucial en Venezuela*, El Nuevo Herald, 20 de Abril de 2004, p. 4A.

<sup>20</sup> Ibidem.

<sup>21</sup> Orlando Ochoa Terán, *Smartmatic y las cajas negras de la lotería*, El Universal, 14 de junio de 2004.

<sup>22</sup> Ver: [http://www.olivetti.com.ar/news/news\\_040430.htm](http://www.olivetti.com.ar/news/news_040430.htm).

<sup>23</sup> *Smartmatic: Hugo Chávez e-firm*, Info Venezuela News.

Ver: <http://infovenezuela.org/corruption/smartmatic-e-voting.php>.

<sup>24</sup> En la columna de sociedad Gritos y Susurros, del cronista Roland Carreño, publicada en El Nacional el 26 de Abril de 2003, se comenta la boda y se identificó a Anzola como el “director fundador de la empresa estadounidense de software Smartmatic Corp”.

<sup>25</sup> Casto Ocando, *Compleja red en torno al voto venezolano*, El Nuevo Herald, 21 de Julio de 2004, p. 6A.

<sup>26</sup> Cenovia Casas, *Imposible vulnerar el secreto del voto*, El Nacional, 14 de agosto de 2004, p. A9.

<sup>27</sup> Ibidem.

<sup>28</sup> *CNE firmó contrato con Smartmatic por \$27 millones*, primera página de El Nacional, 15 de Julio de 2004.

<sup>29</sup> The Carter Center, *Observing the Venezuela Presidential Recall Referendum. Comprehensive Report*, Febrero de 2005, p. 78. Ver: <http://www.cartercenter.org/documents/2020.pdf>.

<sup>30</sup> Michael Barone, *Exit polls in Venezuela*, U.S. News & World Report, 20 de Agosto de 2004.

<sup>31</sup> Laura Weffer Cifuentes, *Smartmatic propone a la oposición otra auditoría*, El Nacional, 24 de Agosto de 2004.

<sup>32</sup> Elizabeth Núñez, *Máquina de Smartmatic pudo ser intervenida*, El Nacional, 21 de agosto de 2004, p. A4.

<sup>33</sup> Vanessa Gómez Quiroz, *Tulio Alvarez: comunicado de la Cantv contradice a Smartmatic*, El Nacional, 11 de Septiembre de 2004, p. A2.

<sup>34</sup> Idem. Alvarez citó el artículo 157 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, que establece que “En los casos en que se adopten sistemas mecanizados de votación, se deberá garantizar que sólo se transmitirán datos una vez concluido el acto de escrutinio”.

<sup>35</sup> Freddy Malpica, Horacio Velasco e Isbelia Martín, *El voto electrónico en Venezuela. Evaluación técnica de un proceso electoral. Caso de estudio: Referendum Revocatorio Presidencial – 15AGO2004*, Esdata, Caracas, octubre 2004, pp. 23-24. Ver: [http://esdata.info/pdf/VotoElectronico\\_es.pdf](http://esdata.info/pdf/VotoElectronico_es.pdf).

<sup>36</sup> Ibidem.

<sup>37</sup> Marianela Palacios, *Rodríguez: Si hubo fraude en transmisión de la data, la Cantv es responsable*, El Nacional, 10 de septiembre de 2004, p. A2.

<sup>38</sup> Van Hutchinson, *Vote Smart*, South Florida CEO, Octubre de 2004.

- 
- <sup>39</sup> Marianela Palacios, *Ministerio Público abrió investigación contra Smartmatic*, El Nacional, 13 de Septiembre de 2004, p. A4.
- <sup>40</sup> Ascensión Reyes, *En 10% de las máquinas de votación se repite el patron del tope al Sí*, El Nacional, 20 de agosto de 2004, p. A4.
- <sup>41</sup> *Piden al Congreso de Estados Unidos que investigue a Smartmatic*, cable de DPA publicado por El Nacional, 23 de Agosto de 2004, p. A3.
- <sup>42</sup> Ver: <http://jorgerodriguez.psuve.org.ve/?p=2897>.
- <sup>43</sup> Ver: [http://www.abrebrecha.com/2217\\_Jorge-Rodr%C3%ADguez-G%C3%B3mez.html](http://www.abrebrecha.com/2217_Jorge-Rodr%C3%ADguez-G%C3%B3mez.html).
- <sup>44</sup> *Cuentos que hicieron historia: ganadores del concurso anual de cuentos del diario El Nacional 1946-2004*, Editorial CEC, S.A., Caracas, 2005, pp. 485. El cuento de Rodríguez está entre las páginas 413 y 422.
- <sup>45</sup> Federico Vegas, *Sobre la obra de Jorge Rodríguez*, El Nacional, 21 de marzo de 2004, p. A9.
- <sup>46</sup> Por ejemplo, en una entrevista María Corina Machado, presidenta de la organización no gubernamental Súmate, que monitorea las elecciones en Venezuela, calificó de “mezcla perversa” la combinación máquinas de votación y máquinas captahuellas porque contribuyen a “crear desconfianza en el secreto del voto”. Ver: <http://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2009/11/eneas-biglione-entrevista-maria-corina.html>.
- <sup>47</sup> Alfredo Meza, *Mejías y Rodríguez polemizaron por entrega de buena pro a consorcio SBC*, El Nacional, 20 de febrero de 2004.
- <sup>48</sup> Edgar López, *TSJ designó a Jorge Rodríguez como nuevo presidente del CNE*, El Nacional, 21 de enero de 2005, p. A6.
- <sup>49</sup> Citado en *Jorge Rodríguez Gómez: un siquiatra para Miraflores*, redacción del diario Tal Cual, 15 de enero de 2007.
- <sup>50</sup> Casto Ocando y Gerardo Reyes, *Pagan gastos de lujo a funcionario electoral*, El Nuevo Herald, 3 de diciembre de 2005, p. 1A.
- <sup>51</sup> Ibidem.
- <sup>52</sup> Eugenio Martínez, *La democracia respira por los votos*, El Universal, 4 de Diciembre de 2005.
- <sup>53</sup> *Lara niega reunión entre Chávez y Jorge Rodríguez*, El Nacional, 13 de Agosto de 2005, p. A4.
- <sup>54</sup> Gerardo Reyes y Casto Ocando, *Involucran en Miami al director de la Disip*, El Nuevo Herald, 21 de diciembre de 2007, p. 1A.
- <sup>55</sup> *El abogado chavista arrepentido*, redacción de La Nación, 26 de enero de 2008. Ver: [http://www.lanacion.com.ar/notas.asp?nota\\_id=982136](http://www.lanacion.com.ar/notas.asp?nota_id=982136).
- <sup>56</sup> Ibidem.
- <sup>57</sup> *Remitido millonario*, sin autor, El Nacional, 30 de septiembre de 2004, p. A2.
- <sup>58</sup> Marianela Palacios, *Smartmatic negocia ocho nuevos contratos de automatización de comicios*, El Nacional, 25 de Agosto de 2004, p. A2.
- <sup>59</sup> Van Hutchinson, *Vote Smart*, South Florida CEO, Octubre de 2004.
- <sup>60</sup> *Sequoia Voting Systems and Smartmatic combine*, Sequoia Media Release, 9 de Marzo de 2005. Ver: <http://www.votetrustusa.org/index.php?option=content&task=view&id=562&itemid=162>.
- <sup>61</sup> *Joint Committee Hearing on March 21<sup>st</sup> Primary Elections*, City of Chicago, Committee on Finance, Committee on the Budget and Government Operations, Committee on Committees, Rules and Ethics, 13 de Abril de 2006.
- <sup>62</sup> Christopher Bollyn, *Chicago ballot chaos*, American Free Press, 26 de marzo de 2006. Ver: [http://www.americanfreepress.net/html/chicago\\_ballot\\_chaos.html](http://www.americanfreepress.net/html/chicago_ballot_chaos.html).
- <sup>63</sup> Ibidem.
- <sup>64</sup> Andy Shaw, *Alderman: Election day troubles could be a conspiracy*, WLS-TV, ABC Channel, 7 de Abril de 2006. Ver: <http://abclocal.go.com/wls/story?section=news/local&id=4065162>.
- <sup>65</sup> Ibidem.
- <sup>66</sup> Gary Washburn, *Alderman sees a plot in voting machines; Burke connects dots to Venezuela leader*, Chicago Tribune, 8 de Abril de 2006, p. 1C.
- <sup>67</sup> *Hugo wants your vote*, Editorial, Investor’s Business Daily, National Edition, 6 de Abril de 2006, p. A12.
- <sup>68</sup> Orlando Ochoa Terán, *¿Quién controla Smartmatic?*, semanario Quinto Día, semana del 5 al 12 de Agosto de 2005.

---

<sup>69</sup> Aleksander Boyd, editor del portal vcrisis.com, se dedicó a hurgar en los archivos de la Cámara de Comercio de Amsterdam, para revisar los registros de originales de Smartmatic en Holanda. Lo que encontró dejó más interrogantes que respuestas, y una compleja estructura que ocultaba parte de los verdaderos accionistas.

<sup>70</sup> Aleksander Boyd, *Smartmatic, all things connected*, portal VCrisis.com, 14 de agosto de 2005. Ver: <http://vcrisis.com/index.php?content=letters/200508141135>. La página tiene vínculos a los documentos originales en holandés de la Cámara de Comercio de Amsterdam.

<sup>71</sup> Alfonso Chardy, *U.S. digs for vote-machine links to Hugo Chávez*, The Miami Herald, 28 de octubre de 2006.

<sup>72</sup> Orlando Ochoa Terán, *Capitalistas ocultos controlan a Smartmatic*, semanario Quinto Día, semana del 19 al 26 de Agosto de 2005.

<sup>73</sup> *Legal Entity Structure*, Smartmatic, prior and after 2005. El documento describe las firmas y subsidiarias que integran el conglomerado de Smartmatic en Estados Unidos, Barbados, México, Holanda, Curazao, Portugal y Venezuela.

<sup>74</sup> *U.S. digs for vote-machine links to Hugo Chávez*, Idem.

<sup>75</sup> Ian Offman, *California: Sequoia quietly leading state e-voting*, Inside Bay Area, 20 de Junio de 2006.

<sup>76</sup> Lou Dobbs, *Democracy at risk*, CNN Transcripts of Lou Dobbs show, 25 de Julio de 2006.

<sup>77</sup> *DP World enters into Agreement to sell P&O's U.S. Marine Terminal Operations to AIG Global Investment Group*, Press Release, DP World, 11 de Diciembre de 2006. Ver: [http://webapps.dpworld.com/portal/page/portal/DP\\_WORLD\\_WEBSITE/Media-Centre/News-Releases/News-Releases-2006/POPNA\\_PRESS\\_RELEASE.PDF](http://webapps.dpworld.com/portal/page/portal/DP_WORLD_WEBSITE/Media-Centre/News-Releases/News-Releases-2006/POPNA_PRESS_RELEASE.PDF).

<sup>78</sup> Richard Brand, *Forget Dubai – Worry About Smartmatic Instead*, The Miami Herald, 27 de Marzo de 2006.

<sup>79</sup> Carta enviada por la congresista republicana por Nueva York Carolyn Maloney, a Henry Paulson, Secretario del Tesoro, 6 de Octubre de 2006.

<sup>80</sup> *U.S. digs for vote-machine links to Hugo Chavez*, Idem.

<sup>81</sup> *Democracy at Risk*, Idem.

<sup>82</sup> Zachary A. Goldfarb, *Voting Machine Firm Denies Chavez Ties*, The Washington Post, 31 de Octubre de 2006.

<sup>83</sup> Casto Ocando, *Bajo la lupa federal firma de tecnología electoral*, El Nuevo Herald, 30 de Noviembre de 2006, p. 1A.

<sup>84</sup> Ibidem.

<sup>85</sup> Ibidem.

<sup>86</sup> Casto Ocando, *Firma de máquinas de votar busca frenar polémica*, El Nuevo Herald, 23 de Diciembre de 2006, p. 4A.

<sup>87</sup> Smartmatic announces the sale of its subsidiary Sequoia Voting Systems, Press Release de Smartmatic, 8 de Noviembre de 2007. Ver:

<http://www.smartmatic.com/pressroom/view/article/smartmatic-announces-the-sale-of-its-subsidiary-sequoia-voting-systems/>.

<sup>88</sup> Ilya Saphiro y Richard Brand, *A step in the right direction*, The Weekly Standard, 19 de Diciembre de 2007.

<sup>89</sup> Edward L. Rubinoff y Henry A. Terhune, *New CFIUS Reform Act Presents challenges to foreign investment in the United States*, The Metropolitan Corporate Counsel, 1 de Septiembre de 2007.

<sup>90</sup> Krem Racines Arévalo, *6 muertos y 2 heridos por accidente aéreo en Catia La Mar*, El Nacional, 29 de Abril de 2008, p. 12.

<sup>91</sup> Gerardo Reyes y Casto Ocando, *Perece en un accidente aéreo fundador de firma Smartmatic*, El Nuevo Herald, 30 de Abril de 2008, p. 4A.

<sup>92</sup> *Smartmatic Corp. v. SVS Holdings, Inc. and Sequoia Voting Systems, Inc.; and SVS Holdings, Inc. and Sequoia Voting Systems, Inc. v. Smartmatic Corp. and Hart InterCivic, Inc.* Civil Action No. 3585-VCL, Court of Chancery of the State of Delaware. Submitted March 31, 2008; decided: April 4, 2008, p. 3

<sup>93</sup> Brad Friedman, *Hart InterCivic attempts hostile takeover of Sequoia Voting Systems*, The Brad Blog ([www.bradblog.com](http://www.bradblog.com)), 10 de agosto de 2008. Las negociaciones en Delaware entre Smartmatic, Sequoia y Hart InterCivic fueron reportadas por primera vez por Friedman.

<sup>94</sup> Brad Friedman, *Sequoia touch-screen voting machines subpoenaed in NJ*, The Brad Blog, 8 de Abril de 2008.

---

<sup>95</sup> John Gideon, *Sequoia e-voting machines reporting inaccurate totals in New Jersey*, The Brad Blog, 20 de febrero de 2008.

<sup>96</sup> Brad Friedman, *NJ Judge gives go ahead to independent review of Sequoia's failed touch-screen voting machines*, The Brad Blog, 25 de Abril de 2008. Ver: <http://www.bradblog.com/?p=5927>.

<sup>97</sup> José Mejía, *Empresa extranjera hará cédula*, El Universal, 25 de Noviembre de 2009. Ver: <http://www.eluniversal.com.mx/primer/33989.html>.

<sup>98</sup> Loida Nicolas Lewis, *Open Letter*, 17 de Abril de 2010.

Ver: [http://xa.yimg.com/kq/groups/18214705/231484376/name/Loida\\_Lewis\\_Smartmatic.pdf](http://xa.yimg.com/kq/groups/18214705/231484376/name/Loida_Lewis_Smartmatic.pdf).

<sup>99</sup> Alek Boyd, *Smartmatic revisited*, 3 de Agosto de 2011.

Ver: <http://alekboyd.blogspot.co.uk/2011/03/smartmatic-revisited.html>.

<sup>100</sup> *Smartmatic Electronic Voting will have to pay for failing computers during last Belgian regional elections*, 16 de Abril de 2013. Ver: <http://dedroidify.blogspot.de/2013/04/smartmatic-electronic-voting-will-have.html>.

<sup>101</sup> Antonio Mugica, *An honest outcome in Venezuela, but what about here?*, The Hill, 18 de Octubre de 2012. Ver: <http://thehill.com/blogs/congress-blog/presidential-campaign/262827-an-honest-outcome-in-venezuela-but-what-about-here>.

<sup>102</sup> Alek Boyd, *Smartmatic's bogus claim about Venezuela election*, The Hill, 19 de Octubre de 2012.

Ver: <http://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/263013-smartmatic-bogus-claims-about-venezuela-election>.